

Santiago, once de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos, oídos y considerando:

**PRIMERO:** Que comparece don Nicolás Clement González y don Pedro Alfredo Pinochet Paiva, ambos ingenieros y en representación de **HEY FOODIE SpA**, todos domiciliados para estos efectos en Bravo N°911, comuna de Providencia, quienes interponen reclamo judicial de conformidad a lo dispuesto en los artículos 503 del Código del Trabajo en contra de la **INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE**, representada por su jefa doña Gabriela María Olave Rodríguez, ambos con domicilio en Vitacura N°3900, comuna de Vitacura, conforme lo prescribe el artículo 503 del Código del Trabajo en contra de la Resolución de Multa N° 1213/23/25 de fecha 11 de mayo de 2023 en virtud de la cual le fue aplicada a su representada una multa por 26,73 ingresos mínimos mensuales, solicitando que sea dejada sin efecto o en forma subsidiaria sea rebajada al mínimo legal.

Funda su reclamo en que su representada fue multada por “no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, según el detalle que indica de documentos y trabajadores que individualiza; infracción respecto de la cual reconoce haber incurrido, pero aduce que por un error involuntario no se logró dar respuesta dentro del plazo indicado por la funcionaria fiscalizadora a cargo del proceso fiscalizador iniciado con fecha 21 de octubre de 2022, a través de la modalidad a distancia. Al efecto indica, que en un principio la funcionaria requirió el envío de una serie de documentos en un plazo de dos días hábiles, requerimiento respecto del cual su representada contestó en tiempo y forma con fecha 25 de octubre de 2022, mediante el envío de toda la documentación solicitada, sin embargo, con fecha 27 de ese mismo mes, la fiscalizadora nuevamente remite a través de la casilla de correos [ncclptLaSerena@dt.gob.cl](mailto:ncclptLaSerena@dt.gob.cl), un correo electrónico donde requiere la presentación de una serie de nuevos documentos a la Empresa respecto de diez trabajadores señalados en una muestra de trabajadores que individualiza, señalándose expresamente en dicho correo que el procedimiento administrativo



comenzó el 21 de octubre de 2022, por lo que, a juicio de su representada esta nueva solicitud no es más que un trámite adicional que se enmarca dentro del procedimiento administrativo de fiscalización N°1322/2021/2405.

Expone la parte reclamante que respecto de este correo y por un error involuntario de la empresa, no se logró dar respuesta dentro del plazo indicado (dos días hábiles), no enviándose la documentación dentro del plazo estipulado ni luego de vencido éste. Este problema se debió a que el trabajador titular de la casilla de notificaciones se debió ausentar de la empresa por una situación médica e, inadvertidamente, su correo electrónico no quedó redirigido a ningún otro trabajador de reemplazo, recibiendo con posterioridad la notificación de la resolución de multa.

Adicionalmente, alega la caducidad y decaimiento del acto administrativo y de la potestad sancionatoria ejercida de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 que dispone expresamente que: *“Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”*.

Al efecto sostiene que el proceso fiscalizadorio se inició con fecha 21 de octubre de 2022, el día 10 de mayo de 2023 recién emitió la decisión de multa, notificando a la empresa con fecha 06 de junio de 2023, advirtiéndose que la Resolución de Multa ha sido dictada habiendo transcurrido más de seis meses desde la fecha en que se dio inicio al procedimiento administrativo de autos, lo que ha degenerado en arbitrario, esto pues ha concurrido una circunstancia que hace imposible materialmente la prosecución del procedimiento, al haber sobrevenido el cumplimiento del plazo de seis meses establecido en la Ley.

La ICT Santiago Oriente, al ser un órgano de la Administración del Estado, debe respetar y dar estricto cumplimiento al artículo 27 de la Ley, así como también al Principio de Celeridad y al Principio Conclusivo que disponen, respectivamente, los artículos 7° 2 y 8°3 de la misma Ley, afectando la tardanza inexcusable del órgano administrativo en la resolución del procedimiento



sancionatorio el Debido Proceso, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, y afecta también gravemente lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la misma carta fundamental.

En subsidio, opone excepción de prescripción de la falta, atendido que la Contraloría General de la República ha resuelto que las normas de prescripción sobre faltas penales contenidas en los artículos 94 y 97 del Código Penal, se aplican por analogía a los actos sancionatorios de los Órganos de la Administración del Estado, en los casos en que la regulación de los procedimientos de fiscalización de los cuales emanan las sanciones administrativas no contemple expresamente disposiciones sobre prescripción. Conforme a lo señalado, las infracciones administrativas prescriben en el plazo de 6 meses desde la ocurrencia del ilícito, que es el plazo de prescripción de las acciones penales para perseguir faltas, del artículo 94 del CP, citando dictámenes administrativos al efecto.

En subsidio, sostiene que la multa ha sido dictada por una fiscalizadora fuera de su territorio jurisdiccional, tal como se advierte en la comunicación emanada por la fiscalizadora en su pie de firma, al señalar que es dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, afectando el principio de legalidad, atendido que la fiscalizadora únicamente puede ejercer sus funciones dentro del límite jurisdiccional de la comuna de La Serena y La Higuera por expresa disposición de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de dicho servicio.

En subsidio de todo lo anterior, solicita que la multa sea rebajada al mínimo legal en virtud de los antecedentes acompañados y el Principio de Proporcionalidad, atendido que su representada se trata de una PyME que tiene por único giro la preparación y distribución de comida a domicilio. Es una Empresa que hoy en día no emplea a más de 50 trabajadores y que, al igual que muchos otros emprendimientos, por las complicaciones económicas del país ha debido cerrar locales y reducir su dotación para sobrellevar los difíciles e inciertos tiempos que han pasado y que se avecinan.



**SEGUNDO:** Que el Servicio reclamado contestó el reclamo, solicitando el rechazo del libelo en todas sus partes con costas. En primer término sostiene como cuestión previa que la reclamante no cuestiona los hechos de la infracción, vale decir reconoce efectivamente que no exhibió la documentación requerida en tiempo y forma señalando en efecto, que se le requirió documentación con fecha 25 de octubre de 2022 (la que corresponde al formulario de inicio de fiscalización que debe firmar y la nómina de trabajadores de la empresa), señala que remitió dicha documental y que posteriormente se le habría remitido otro correo requiriéndoles más documental (documentos que corresponden al requerimiento de documentación para llevar a cabo la fiscalización de autos tomando al efecto una muestra de 10 trabajadores), refiere posteriormente que el correo donde se le requiere la documentación necesaria para efectuar la fiscalización no fue respondido por la empresa ni dentro del plazo otorgado por la fiscalizadora ni tampoco luego de vencido dicho plazo, lo anterior a raíz que el trabajador a cargo de la casilla de notificaciones, se debió ausentar de la empresa por una situación médica y que el correo no fue revisado por ningún otro trabajador puesto que no quedo redirigido a otra casilla.

Recalcar en este punto que la multa le fue notificada el 11 de Mayo de 2023 por parte de la ICT Santiago Oriente y que a esa fecha la documentación tampoco había sido remitida, sin otorgar la empresa ninguna aclaración a por que en más de 6 meses no efectuó revisión alguna del correo electrónico y por qué no dio nunca respuesta, tampoco se indica si el trabajador al cual hace referencia se mantuvo durante todo este tiempo con licencias médicas o imposibilitado por algún otro motivo de revisar el correo electrónico, no aclara tampoco el por qué no tomo alguna medida para revisar el correo electrónico donde llegan las notificaciones y requerimientos de la Dirección del Trabajo.

Asimismo, sostiene que la empresa reclamante se trata de una empresa mediana con más de 91 trabajadores, por lo que no se justifica entonces que refiera que nadie reviso el correo electrónico, razón por la cual no remitió en definitiva la documental requerida, lo anterior aún más considerando que la



empresa sabía que estaba en un proceso de fiscalización ya que reconoce que recibió el primer correo de parte de la fiscalizadora.

La fiscalización de autos se origina producto de una denuncia efectuada por un trabajador, en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, señalando aquel al efecto que el empleador no le ha otorgado los dos domingos libres al mes, que no se pagan horas extras en los feriados trabajados, y que el porcentaje del 30% por domingo trabajado no se paga correctamente, refiere que se comunicó con personal de R.R:H.H de la empresa pero que no se le otorgo solución alguna, indica además que la empresa modifica sin previo aviso su horario de trabajo. Que respecto de dichas circunstancias se efectuó una fiscalización con objeto de verificar la efectividad de los hechos denunciados.

Conforme al proceso de fiscalización se procedió a efectuar requerimiento de documentación a la casilla de correo electrónico registrada por la propia empresa ante este servicio conforme a lo estipulado en el artículo 508 del Código del Trabajo, la fiscalización de autos fue efectuada de forma remota conforme al manual de procedimiento de fiscalización versión 3.0 de fecha 01 de octubre de 2021 y a la circular complementada 57 sobre procedimiento de fiscalización extraordinario en modalidad a distancia de fecha Septiembre de 2022. De esta forma se remitió correo electrónico a la casilla de la empresa [lrivas@heyfoodi.cl](mailto:lrivas@heyfoodi.cl) explicando el procedimiento de fiscalización de autos respondiendo don Leónidas Rivas quien remitió de vuelta formulario de Plantilla de inicio de procedimiento a distancia y formulario Pi-01-2 de Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización. Posteriormente la fiscalizadora efectuó un requerimiento de documentación específica respecto de una muestra de trabajadores necesaria para verificar las materias denunciadas en la fiscalización, requerimiento efectuado el 27 de Octubre de 2022, sin que la empresa diere respuesta de dicho correo, por lo anterior incluso con fecha 25 de abril de 2023 la fiscalizadora remitió un nuevo correo electrónico informando la no presentación de los documentos requeridos y solicitando nuevamente que los mismos fueren remitidos (correo al cual no hace referencia la demandante en su reclamación), correo del cual el



empleador no dio tampoco respuesta alguna, cursándose finalmente la multa de autos con fecha 11 de Mayo de 2023.

.Por lo anterior no fue posible efectuar un análisis documental de las materias denunciadas por el trabajador, ya que la documentación no fue exhibida por la empresa. De esta forma y al no recibir respuesta alguna de la empresa es que se procede a efectuar notificación de la multa, por no exhibir documentación requerida, conforme a lo constatado en la fiscalización, dejándose constancia en el informe de fiscalización respectivo, documento que de acuerdo al artículo 23 de D.F.L. N° 2 de 1967 - Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo- goza de presunción legal de veracidad, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial; y que en concordancia con lo establecido en el artículo 1.698 del Código Civil, determina que la carga de la prueba corresponderá a la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ajustó a la legislación laboral vigente.

Ahora bien, reconociendo la empresa que no remitió la documentación requerida, señala que dicha circunstancia se originó ya que los funcionarios de la empresa reclamante no habían efectuado una revisión adecuada del correo electrónico. La reclamante señala al efecto que no efectuó una revisión de la casilla del servidor de la empresa durante más de 5 meses y que en efecto no remitió la documentación, lo anterior sin efectuar tampoco ninguna aclaración. Pretende en tal sentido la reclamante alegar una ignorancia de la disposición legal para pretender una rebaja en la cuantía de la multa, contrario a lo que sustenta la reclamante el artículo 508 del Código del Trabajo que establece un nuevo proceso de notificación, en que por disposición expresa de la ley establece la obligación para el administrado en cuanto a contar con una casilla electrónica operativa que debe ser informada por la empresa.

Que respecto de esta multa y conforme a la documentación que se aportará la empresa tenía un correo electrónico informado ante la Dirección del Trabajo, correo electrónico al cual se efectuó la notificación de requerimiento de documentación y de inicio de fiscalización, lo anterior conforme al precepto legal.



De esta forma es carga de la empresa que dicha cuenta de correo electrónico esté operativa, se trata aquí de un correo operativo que no fue revisado por la empresa, la cual es una gran empresa con más de 91 trabajadores, sin que se justifique por tanto las alegaciones de la reclamante en cuanto a que el trabajador a cargo de la casilla se habría enfermado, por lo anterior lo que pretende la reclamante es transferir esa responsabilidad de la empresa de mantener operativa una dirección de correo electrónico para pretender con lo anterior dejar sin efecto la multa, o sustentar una rebaja en la cuantía de la misma, conclusión que implicaría una evidente vulneración del precepto legal en cuestión.

De esta forma se constata conforme a los propios dichos de la reclamante que esta no adopto ciertamente las medidas necesarias para dar cumplimiento al nuevo requerimiento legal, situación respecto de la cual no puede alegar ignorancia puesto que es la propia empresa quien crea la casilla en su dominio web y después procede a registrar dicha dirección de correo electrónico ante la Inspección del Trabajo, en tal sentido revisar diariamente dicha casilla de correo electrónico es parte de las obligaciones que debe asumir la empresa. Por lo anterior no adoptó la reclamante las medidas pertinentes, pretendiendo mantenerse en una postura de exculparse de recibir los correos electrónicos y obstaculizando con lo anterior severamente todos los procesos de fiscalización, antecedentes todos por los cuales la presente reclamación debe ser necesariamente rechazada con ejemplificadora condena en costa a la empresa.

Que, en este orden de ideas, la multa de autos se encuentra correctamente cursada y no correspondería que la multa fuere rebajada, lo anterior ante la efectividad de los hechos por los cuales fue cursada la multa, y al no poder acreditarse la integra corrección posterior respecto de una multa que se genera “in actum” como lo es la por no exhibir documentación, impidiendo con lo anterior el proceso fiscalizadorio, no siendo procedentes las alegaciones de derecho efectuadas, ya que la multa es cursada conforme a la gravedad de la infracción y al tamaño de la empresa fiscalizada siendo carga de la empresa el contar con un



correo electrónico operativo, pudiendo en tal sentido incluso modificar la propia empresa cual es el correo que informa, asegurando por tanto y siendo carga de aquella que el correo informado funcione, no siendo procedente además una rebaja del monto de la misma en base a un criterio de proporcionalidad como ya se señaló

En cuanto a la supuesta vulneración de las normas de la ley 19.880, caducidad y decaimiento del acto administrativo, conforme se desprende del reclamo judicial, la reclamante pretende además que se deje sin efecto la Resolución de multa por una infracción a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.880, norma que al efecto no refiere lo pretendido por la reclamante, pues no se establece sanción alguna en caso de excederse dicho plazo respecto de la multa, sino que sólo una sanción administrativa respecto del funcionario actuante. En tal sentido la única norma que refiere o determina la nulidad de un acto administrativo se encuentra señalado en el artículo 13 de la ley 19.880, que establece: “El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.”, que, ni el procedimiento, la Resolución de Multa o la notificación, tienen, ningún vicio que afecte la validez del acto.

Debiendo en tal sentido la reclamante acreditar la existencia de un perjuicio, circunstancia que no podrá ser acreditada lo anterior al desentenderse la reclamante de las propias acciones que establece la ley 19.880 como son las establecidas en el artículo 64 del mismo cuerpo legal.

En la especie, la reclamante habiendo sido requerida en más de dos oportunidades distintas (27 de octubre de 2022 y 25 de Abril de 2023) de remitir la documental necesaria para efectuar el procedimiento de fiscalización lo cierto es que no lo hizo, por lo anterior la demora en la fiscalización deviene de la propia negligencia de la parte empleadora en cuanto a no remitir la documental de autos en tiempo y forma, pretendiendo esta beneficiarse de su propia tardanza que ha





impedido la fiscalización, circunstancia que resulta del todo contraria a la buena fe procesal.

De esta forma en los fallos en los cuales se hace referencia por la reclamante, las empresas acreditaron haber efectuado acciones requiriendo el pronunciamiento de los órganos de la administración del estado, acreditándose de esta forma el supuesto del artículo 13 de la ley 19.880 según se ejemplificara más adelante, circunstancia muy diferente a la de la presente causa en que la empresa ha generado la tardanza que reprocha.

Que este criterio también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema refiriendo que la regla general es que la Administración no está sujeta a plazos para cumplir sus obligaciones, aun cuando la ley los fije determinadamente. Los actos de ejecución extemporánea de dichas obligaciones son, en consecuencia, válidos, para todos los efectos legales, por lo que no se podría declarar “La caducidad de la infracción”, como pretende la contraria y menos aún la nulidad y/o ineficacia del acto administrativo, puesto que el cumplimiento de la fiscalización deviene de un interés general, para el caso particular dicho interés refiere que se efectúe una revisión concretas de las materias denunciadas por el trabajador.

Que, a mayor abundamiento, el artículo 13, inciso 2º de la Ley 19.880.-, establece que: “El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.”, que, ni el procedimiento, la Resolución de Multa o la notificación, tienen, ningún vicio que afecte la validez del acto.

En cuanto a la argumentación que enuncia como prescripción señala la reclamante en su demanda, que transcurrieron más de 6 meses desde la supuesta infracción hasta que se le notifica la multa, señalando al efecto que la propia Contraloría General de la Republica habría establecido que debe aplicarse la prescripción contenida en los artículos 94 y 97 del Código Penal, señalando al efecto un Dictamen de fecha 01 de Julio de 2008 N° 30.070, el que a la fecha y



desde el 12 de septiembre de 2019 NO SE ENCUENTRA VIGENTE. En tal sentido el DICTAMEN VIGENTE DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA corresponde al 024731N19 de fecha 12.09.2019, que cita. se resuelve que en materia de prescripción de multas administrativas resultan aplicables las reglas del derecho común a la expresión, y en rigor la norma general de prescripción de cinco años que establece el artículo 2515 del código civil.

El criterio señalado, es además, concordante con lo que ha establecido nuestra excelentísima corte suprema, la que se ha pronunciado al efecto en diversos fallos tales como el 2961-2017, 8429-2017, 765-2018, en todos los cuales estableció que el criterio de prescripción para las multas es el de 5 años conforme a lo dispuesto en el artículo 2515 del código civil.

En cuanto a la alegación de la contraria de no tener facultades este servicio para constatar multas, respecto de los hechos constatados por el fiscalizador, indicar en efecto que contrario a lo que señala la reclamante la fiscalizadora actuó en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, circunstancia que se le hizo presente a la reclamada al inicio de la fiscalización, en concordancia la multa fue cursada por la ICT Santiago Oriente y no por la IPT de la Serena, refiere la reclamante además que la fiscalizadora no podría haber constatado la multa cursada, sin explicitar de que forma la fiscalizadora debería no haber constatado una multa por no exhibir, cuando en los hechos la propia reclamante reconoce que no remito la documental en tiempo y forma, aquello implicaría que la fiscalización quedara a criterio del fiscalizado lo que no es sostenible en un estado de derecho, no existiendo norma alguna que señale expresamente que se priva de competencia a este servicio para fiscalizar hechos constatados y que además no son controvertidos por la reclamante, la fiscalización de autos se efectuó de forma remota actuando la fiscalizadora en comisión de servicio para la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, activada la fiscalización mediante un ingreso en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, efectuándose la fiscalización a nombre de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, cursándose la multa por parte de la Inspección Comunal



del Trabajo Santiago Oriente, encontrándose el domicilio de la empresa dentro del territorio de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

Por todo lo relatado no se acredita tampoco donde estaría el perjuicio que permitiría dejar sin efecto la multa, aun mas considerando que la propia reclamante reconoce que no remitió la documental requerida y que el fiscalizador estaba actuando en comisión de servicio para la ICT Santiago Oriente.

Por lo anterior la multa ha sido impuesta en base a los hechos constatados, en caso alguno podría, entonces, afirmarse, que la Inspección del Trabajo, con su actuación, excedió sus atribuciones.

**TERCERO:** Que celebrada la audiencia preparatoria con fecha 17 de agosto de 2023, fueron llamadas las partes a conciliación, la que no prosperó, siendo fijado como hechos no controvertidos los siguientes:

1. Que la reclamada dictó la resolución de multa N°1213/23/25, de fecha 11 de mayo de 2023, mediante la cual se sancionó a la reclamante con multa de 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales por los hechos que en ella se señalan.

2. Que la reclamante no envió los documentos solicitados por requerimiento de la reclamada mediante correo electrónico de 27 de octubre de 2022.

3. Que la reclamante es una mediana empresa conforme al artículo 505 bis del Código del Trabajo.

Asimismo, fue recibida con posterioridad la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos a probar:

1. Hechos justificativos del incumplimiento de la reclamante respecto de lo solicitado por la reclamada en correo electrónico de 27 de octubre de 2022.

2. Efectividad de haber operado el decaimiento del acto administrativo. Hechos que lo configuran.



3. Efectividad que la fiscalizadora actuó fuera de su competencia. Hechos que lo configuran.

4. Efectividad de encontrarse prescritos los hechos que originaron la resolución de multa. Hechos que lo configuran.

5. Procedencia de la rebaja de la multa impuesta.

**CUARTO:** Que la parte **reclamante** ofreció e incorporó la siguiente prueba:

**-Documental:**

1. Correo electrónico con el asunto: Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización N°1322/2021/2405 de 21 de octubre de 2022.

2. Correo electrónico de respuesta de 25 de octubre de 2022, con mismo asunto enviado por Leonidas Rivas.

3. Requerimiento de documentación en procedimiento de fiscalización N°1322/2021/2405 de 27 de octubre de 2022.

4. Notificación Multa N°1213/23/25 de 6 de junio de 2023 y Resolución de Multa adjunta.

5. Set de seis finiquitos de trabajadores de la muestra solicitada por Fiscalizadora.

6. Comprobante de pago de cotizaciones previsionales de ACHS de septiembre de 2022.

7. Comprobante de pago de cotizaciones previsionales de ACHS de abril de 2023.

**-Testimonial:** Prestó declaración en la audiencia de juicio el testigo don Leonidas Enrique Rivas Catalán, según consta en audio.

Por su parte, la **reclamada** ofreció e incorporo los siguientes documentos:



1. Copia de caratula de informe de fiscalización N° 1322/2021/2405
2. Copia de informe de exposición de fiscalización N° 1322/2021/2405
3. Copia de resolución de multa 1213/23/25 de fecha 11 de mayo de 2023, así como consulta de notificación de multa.
4. Copia de activación de fiscalización N° 1322/2021/2405
5. Copia de correos electrónicos intercambiados durante el proceso de fiscalización.
6. Copia de formulario Fi-2 de fiscalización N° 131322/2021/2405
7. Copia de correo de requerimiento de documentación de fecha 27 de octubre de 2022 y correo en que se vuelve a requerir la misma documentación de fecha 25 de abril de 2023, lo anterior al no remitirse en correo de 25 de octubre de 2022 la totalidad de los documentos requeridos.
8. Copia de consulta NCC de correo electrónico informado por la empresa y vigente al 25 de Abril de 2023.
9. Copia de Consulta NCC de correo electrónico informado por la empresa y vigente al 6 de junio de 2023, junto a correo de notificación de la multa de autos y multa reclamada como archivo adjunto.
10. Copia de dictamen (024731N19) 24.731 de fecha 12 de Septiembre de 2019 de Contraloría General de La República de Chile.
11. Copia de dictamen 1000 / 009 de fecha 19 de Marzo de 2021 de la Dirección del Trabajo.

**QUINTO:** Que apreciadas las pruebas incorporadas por las partes, conforme a las reglas de la sana crítica, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por los intervinientes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:



a) Que con fecha 03 de octubre de 2022 fue asignado procedimiento de fiscalización al servicio reclamado, en virtud de activación de fiscalización realizada por Fabian Manosalva Muñoz con fecha 02 de julio de 2021 ante la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, siendo designada como funcionaria actuante doña Cristina Elena Gallardo Valdivia, quien notificó inicio de procedimiento fiscalización en modalidad a distancia a la empresa denunciada con fecha 21 de octubre de 2022 al correo registrado por la empresa denunciada ante dicha Institución [lrivas@heyfoodie.cl](mailto:lrivas@heyfoodie.cl), requiriéndose documentación laboral, previsional y de seguridad de trabajadores de la empresa; hecho no controvertido entre las partes y, que se tiene por establecido con el mérito de la caratula de fiscalización e informe de exposición, debidamente incorporados por el Servicio reclamado, no objetado de contrario.

b) Que la empresa reclamante respondió el requerimiento de documentación aludido en la letra precedente en el plazo de dos días hábiles otorgado por la funcionaria actuante por medio de correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2022, siendo requerida nuevamente la empresa reclamante a través de correo electrónico remitido por la misma funcionaria actuante con fecha 27 de octubre de 2022, correo que no fue respondido por la reclamante, siendo reenviado nuevamente por dicha funcionaria a la casilla de correo registrado por la empresa por medio de correo electrónico de fecha 25 de abril de 2023, sin obtener respuesta de la empresa; hecho que se tiene por establecido con el mérito de la prueba documental incorporada por el Servicio reclamado que da cuenta del envío de los dos correos antes aludidos, no objetados de contrario y, teniendo presente la declaración del testigo presentado en autos, correspondiente a don Leonardo Rivas Catalán, quien en su calidad de Jefe de Recursos Humanos y remuneraciones de la reclamante reconoció en estrados que el correo registrado por la empresa corresponde al individualizado en la letra precedente, correspondiendo a su casilla de correo, teniendo acceso solo el a dicho correo, reconociendo que no vio el segundo correo en que fueron requeridos de documentación porque se encontraba con permiso, no teniendo reemplazo habitualmente cuando se ausenta de sus funciones.



c) Que con fecha 10 de mayo de 2023 fue cursada una multa a la empresa reclamante mediante Resolución N°1213/23/25, por la fiscalizadora Cristina Elena Gallardo Valdivia por 26,73 ingresos mínimos mensuales por infracción a los artículos 31 y 32 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; hecho que se encuentra controvertido entre las partes y, se tiene por establecido en virtud del mérito de la resolución de la multa individualizada, incorporada por las partes.

**SEXTO:** Que en relación al hecho infraccional en virtud del cual es cursada la multa en discusión, cabe tener presente que la parte reclamante reconoce en el escrito de reclamo y a través de la declaración del testigo presentado en estrados que incurrió en dicha infracción, al no responder el segundo requerimiento de documentación por parte de la funcionaria actuante, sin otorgar ninguna justificación respecto de dicha situación, más que efectuar alegaciones de derecho relativas al acto administrativo en virtud de la resolución dictada y el plazo de su dictación, pero en lo relativo al fondo no existe discusión alguna que permita a este Tribunal dejar sin efecto dicha multa, más aun, teniendo presente que con el mérito de la prueba rendida por el Servicio reclamado ha quedado establecido que la fiscalizadora remitió nuevamente el requerimiento de documentación a la casilla de correo registrado por la empresa por medio de correo electrónico de fecha 25 de abril de 2023, sin obtener respuesta de la empresa, tal como consta de la documental incorporada por dicho Servicio, no existiendo alegación alguna de la empresa reclamante respecto de este último requerimiento más aún si transcurrieron casi 6 meses entre cada uno de los requerimientos sin que diera respuesta alguna al proceso fiscalizatorio.

**SEPTIMO:** Que en relación a la alegación de caducidad y decaimiento del acto administrativo, cabe tener presente que la Ley N°19.880, establece las BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO y si bien, en su artículo 23, establece la “Obligación de cumplimiento de los plazos.”, al señalar que: “Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a



las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos.” y, por otra parte en su artículo 27, efectivamente dispone que: *“Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”*; en ninguna parte del articulado de dicha Ley establece los efectos de dicho incumplimiento por algún Órgano de la Administración del Estado, pudiendo concluirse que a estos últimos no le son exigibles plazos fatales, más aun teniendo presente que en el caso de autos, encontrándose notificada la empresa reclamante con fecha 21 de octubre de 2022 del inicio del proceso fiscalizadorio en su contra, limitara su intervención en responder el primer requerimiento de documentación del Órgano Fiscalizador, omitiendo responder dos nuevos requerimientos, el primero de fecha 27 de octubre de 2022 que la propia empresa reconoce haber recibido y no haber respondido por un “error” y un último requerimiento con fecha 25 de abril de 2023, sin que hiciera alusión alguna en el reclamo judicial respecto de este último requerimiento y/o la tardanza en la conclusión del proceso fiscalizadorio por esta última situación, sino que solo contabilizando los dos primeros requerimientos del mes de octubre de 2022, sin embargo, de los antecedentes también queda en evidencia la negligencia de la empresa reclamante y/u omisión en el cumplimiento de dar respuesta oportuna a los requerimientos de la entidad fiscalizadora, por lo que se desecha la alegación planteada.

**OCTAVO:** Que en relación a la petición subsidiaria de aplicación del plazo de prescripción de la falta fundado en los artículos 94 y 97 del Código del Trabajo, cabe tener presente, -a juicio de esta sentenciadora-, que en ningún caso dicha normativa sería aplicable al caso que nos convoca en el presente proceso, existiendo norma explícita referida a materia de prescripción en materia laboral en el artículo 510 del Código del Trabajo, norma en la cual si bien no se hace alusión con claridad a los reclamos judiciales de multas cursadas por aplicación de multas, ello no quiere decir que le sean aplicables al procedimiento judicial contemplado en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, existiendo tanto jurisprudencia administrativa como judicial más reciente que la invocada en el libelo, que





establece que el plazo de prescripción en ese caso aplicable es de 5 años, tal como lo establece el artículo 2515 del Código Civil, por ende, resulta absolutamente improcedente su alegación, teniendo presente, además, que la actuación fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, precisamente se trata de facultades de orden público.

**NOVENO:** Que en relación a la alegación que la resolución de multa recurrida ha sido dictada por una funcionaria fiscalizadora fuera de su territorio jurisdiccional, atendido que la fiscalizadora actuante se trata de una dependiente de la Inspección del Trabajo de La Serena, tal como se desprende del pie de firma del primer correo electrónico remitido por dicha fiscalizadora a la empresa reclamante con fecha 21 de octubre de 2023, incorporado en su texto completo por la reclamante como parte de su prueba documental, del que se desprende que efectivamente la funcionaria fiscalizadora Cristina Gallardo Valdivia se individualiza en el pie de firma de dicho correo como Inspectora de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena; sin embargo, se hace presente que el procedimiento fiscalizadorio se llevara a efecto de manera remota, debiendo recordar que el domicilio de la empresa reclamante se ubica en la ciudad de Santiago, en la comuna de Las Condes, siendo requerido el Servicio demandado por activación de fiscalización de trabajador denunciante precisamente ante la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, Servicio que precisamente es el que lleva a efecto el proceso fiscalizadorio a través de la designación de la funcionaria actuante y cursa la multa recurrida, tal como se desprende del mérito de la resolución recurrida y demás antecedentes incorporados por la parte reclamada, por lo que será desestimada también dicha alegación.

**DECIMO:** Que por último, en relación a la solicitud de rebaja de la multa recurrida, cabe tener presente que la empresa reclamante alego en el libelo tener la calidad de Pyme que no emplea a más de 50 trabajadores, sin indicar el número total, sin embargo, ninguna prueba idónea ofreció ni rindió para desvirtuar los hechos constatados por la funcionaria fiscalizadora en cuanto a tener 91 trabajadores, atendido que la cartola de pago de cotizaciones de ACHS informa



como número de trabajadores informados en virtud de los cuales cotiza con fecha 13 de octubre de 2022 asciende a 81 trabajadores y dicho número se reduce a 30 en abril de 2023, sin embargo, este último documento es posterior al primer requerimiento de documentación respondido por la reclamante en el mes de octubre de 2022, no pudiendo concluirse únicamente por el mérito de dicho documento que tuvo la variación el número de trabajadores que reclama, pudiendo haber ofrecido e incorporado el libro de remuneraciones del periodo que abarco el proceso fiscalizadorio, atendido que la declaración y pago de cotizaciones depende únicamente de la voluntad y cumplimiento del empleador, sin que sea el documento idóneo para acreditar la real cantidad de trabajadores dependientes bajo su subordinación se encuentran vigente en un periodo determinado, por lo que también, se procederá a desechar esta ultima petición.

**DECIMO PRIMERO:** Que la prueba rendida ha sido apreciada conforme a las reglas de la sana crítica de conformidad a lo establecido en el artículo 456 del Código del Trabajo.

**DECIMO SEGUNDO:** Que habiendo resultado totalmente vencida la reclamante, se la condenará en costas por estimar que no tuvo motivos plausibles para litigar.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 10, 420 a 462, 503 del Código del Trabajo, artículos 23 y 27 de la Ley N°19.880, se declara:

I. Que, se **RECHAZA**, en todas sus partes, el reclamo interpuesto por don Nicolás Clement González y don Pedro Alfredo Pinochet Paiva, en representación de **HEY FOODIE SpA**, en contra de la **INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE**, que dictó la Resolución recurrida N° 1213/23/25 de fecha 11 de mayo de 2023, quedando en consecuencia firme la multa cursada por 26,73 ingresos mínimos mensuales.

II. Que se condena en costas a la parte reclamante, por estimar que no tuvo motivos plausibles para litigar, las que se regulan en la suma de \$400.000.



III.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase con lo resuelto en ella dentro de quinto día, de conformidad a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Devuélvanse los documentos a cada parte, una vez que quede ejecutoriada la sentencia.

**RIT N° I-341-2023**

**RUC N° 23-4-0494385-5**

Dictada por doña ANDREA PAOLA SOLER MERINO, Jueza Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>